



NUE 143-A-2019 (DH)

Fernández Solórzano contra Universidad de El Salvador

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del quince de junio de dos mil veinte.

Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Josué Omar Fernández Solórzano**, en adelante el apelante, en contra la resolución emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador (UES)**, con referencia UAIP/RE099/2019, de fecha 12 de junio de 2019, que denegó la información consistente en: “el directorio, currículo, y correos institucionales de los miembros que integran el Consejo Superior Universitario (CSU); la Asamblea General Universitaria (AGU); responsable de Auditoría Interna; (4) secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades; titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios; Subalterna identificada como “Nancy”, especificando la remuneración mensual del cargo presupuestado de todas las personas anteriormente mencionadas”

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

En ese sentido, dicha funcionaria pública resolvió “proporcionar respuestas a solicitud de información anteriormente descrita”, ordenando entregar todo lo proporcionado por las unidades administrativas (18 documentos) en copia certificada, junto con la declaratoria de inexistencia de lo concerniente a la información de la subalterna identificada como “Nancy”. Para ello, al momento de notificar al ciudadano se hizo de su conocimiento que deberá cancelar un arancel correspondiente a \$42.50 y para el caso de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales es necesario que se “apersonara” a la Unidad Auxiliar de la referida Facultad para que le informen el costo arancelario.



Este Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Olga Noemy Chacón**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, pero ante la finalización del período de su nombramiento, y de la renuncia realizada el 12 de febrero de 2020, por el comisionado propietario **Juan Carlos Rodríguez Turcios**, la instrucción del presente procedimiento ha sido designada a la **Comisionada Daniella Huezo**. Asimismo, en pleno cumplimiento al derecho de defensa y audiencia de las partes, se solicitó la presentación a la UES del informe de justificación del acto conforme al Art. 88 de la LAIP.

Dentro de la instrucción del presente caso, es válido establecer que se realizó audiencia de avenimiento¹ con la finalidad que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio, habiéndose entregado en dicha audiencia, por parte del ente obligado al ciudadano apelante -presuntamente- la información objeto de controversia del presente procedimiento de apelación, por lo cual se le otorgó el plazo de tres días hábiles al apelante a efecto de revisar su contenido y manifestarse al respecto, estando pendiente la información concerniente a la subalterna con el nombre de “Nancy”, de lo cual se realizaría una nueva búsqueda por parte de la UES.

Acto seguido, como respuesta a dicho traslado -el 16 de agosto de 2019- **Fernández Solórzano** presentó escrito por medio del cual manifiesta su inconformidad en la documentación entregada por la UES por estar “incompleta e inacabada”, además no se ha proporcionado la información concerniente a las secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de quienes solicitaba directorio, currículo, y correos institucionales, así como la remuneración mensual del cargo presupuestado. Asimismo, alegó que la información entregada ésta incompleta y se declaró la inexistencia de la información concerniente a la persona identificada como “Nancy Elizabeth Guardado Cortez”.

Para este caso, el ente obligado rindió el informe de ley que establece el Art. 88 de la LAIP, en fecha 19 de agosto de 2019, en el cual se hizo una reseña del trámite de la solicitud de información dentro de la UES, y se hace referencia a la entrega de la información en un CD, el acuerdo de realizar nueva búsqueda de registros de la subalterna de nombre “Nancy”, sin embargo en el mismo escrito ratifica lo alegado por la oficial de información, en cuanto

¹ En fecha 13 de agosto de 2019.

a la inexistencia de información alguna respecto a la persona en comento. Arias Alvarado también alega que pese a ser titular de la Universidad de El Salvador, no está bajo sus competencias el funcionamiento ejecutivo de las facultades, sino que es atribución exclusiva del Decano, pese a ello como rector le ha hecho entrega de la información que ha solicitado el apelante.

Posteriormente en audiencia oral realizada dentro del presente procedimiento de apelación se contó con la comparecencia del apoderado del ente obligado y sin la asistencia del ciudadano apelante, no obstante estar legalmente citado y notificado. Acto seguido, en la fase de admisión probatoria, al no haberse realizado por el apelante la determinación la utilidad y pertinencia de la prueba documental y testimonial ofertada, se decretó el rechazo de la misma, al no contarse con elementos mínimos que establezcan su vinculación con el objeto de conocimiento en este caso.

Acto seguido, en la fase de alegatos el apoderado de la UES en lo medular manifestó que ratificaba el contenido del informe de defensa presentado por el señor Rector de la UES, en el sentido que se ha hecho la entrega de la información requerida por el ciudadano apelante. Que respecto a la información de la persona identificada como "Nancy" señala que luego que se ha realizado la búsqueda de información se ha establecido que la misma no ha sido subalterna o empleada de la UES, más bien ha ejercido funciones en calidad de estudiante en horas sociales, lo cual se corrobora con la documentación entregada al apelante respecto a la copia de la nota de servicio social y de la constancia de incapacidad de la secretaria de la Defensoría de Derechos de los Estudiantes de la UES, motivo por el cual la estudiante Nancy recibió la documentación presentada por el ciudadano apelante. En atención a lo anterior, el apoderado del ente obligado, solicitó que se exonere a la UES en el presente procedimiento de apelación.

En la fase de preguntas aclaratorias, realizadas por el Pleno de este Instituto, el representante de la UES, confirmó que la información requerida se remitió vía electrónica al solicitante sin hacer cobros arancelarios, y que considera que la inconformidad del mismo es sobre todo con la información concerniente a la persona identificada como "Nancy".



Es de hacerse constar que en fecha 11 de febrero de 2020, se remitió vía correo electrónico escrito por parte del ciudadano apelante por medio del cual realiza una serie de argumentos respecto a los expedientes NUE 18-A-2019 y NUE 143-A-2019, sin que existe una acumulación de los referidos casos, y es su petición que: *“se admita la presente denuncia y recurso de apelación para que se gestione el trámite legal correspondiente”* y se multe a la oficial de información de la UES por la denegación de la información solicitada. Finalmente, requiere que se les dé celeridad a sus peticiones.

1. Análisis del caso:

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información requerida, valorado la naturaleza de la misma y los principios rectores de disponibilidad e integridad. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Naturaleza de la información solicitada. **(II)** Determinación del cumplimiento de los principios de disponibilidad e integridad, respecto a la documentación entregada por parte de la UES; y, **(III)** Diligencias que obliga la ley para la declaración de inexistencia de la información

I. La información solicitada por el ciudadano **Josué Omar Fernández Solórzano**, consiste en el directorio, currículo, la remuneración mensual del cargo presupuestado y correos institucionales de los miembros que integran el Consejo Superior Universitario (CSU), la Asamblea General Universitaria, del responsable de Auditoría Interna de la UES, de las cuatro secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades del ciclo II-2018, del titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de la Subalterna identificada como “Nancy”.

Al respecto debe advertirse que la estructura del Gobierno Universitario de la UES, de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de su Ley Orgánica, señala que los órganos que la constituyen son la Asamblea General Universitaria (AGU), el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Rector. Por su parte, el Gobierno de las Facultades será ejercido, dentro de los límites de su respectiva competencia, por la Junta Directiva y el Decano. Es decir, ambos organismos colectivos -AGU y CSU- son parte de la estructura operativa de la UES y se encuentran conformados -en su mayoría- por empleados y funcionarios públicos,

y los estudiantes que ejercen representación en los mismos, reciben remuneraciones por medio de dietas, que provienen de fondos públicos.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos de los miembros de la UES, se consigna en el Art. 62 de la LOUES, como un organismo independiente de los órganos de gobierno universitario y de cualquiera de sus funcionarios. Dicho organismo tiene por objeto conocer de las violaciones que cualquier autoridad universitaria cometa a los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, por actos u omisiones, garantizando la defensa o restauración de tales derechos, para quien resultare afectado. En consecuencia, sus atribuciones y funciones también constituyen una función pública a favor de los derechos de los ciudadanos estudiantes de dicha universidad, por el carácter público de ese centro superior de estudios.

En tal sentido, la información requerida es de naturaleza pública, al corresponder a la identificación -del directorio y correo institucional, hojas de vida y remuneración mensual- de empleados públicos que ejercen funciones dentro de la estructura administrativa de la UES y del quehacer universitario. Asimismo, los estudiantes que también tienen representación en tal estructura -como se ha dicho previamente-, reciben dietas en concepto de asistencia a las sesiones correspondientes, por lo cual también son sujetos obligados de conformidad al Art. 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)

Conforme a lo anterior, se debe advertir que la información pública promueve la rendición de cuentas y contraloría social. Es así que en el presente caso se se solicita información concerniente a empleados públicos o a estudiantes que recibe y administran recursos públicos, se habilita la posibilidad de una fiscalización, en cuanto a conocer el monto recibido, hoja de vida y sus contactos institucionales -en caso se tengan-.

En este sentido, el apelante en el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la información, ha iniciado el presente procedimiento, habiéndose reconocido en reiteradas ocasiones por este Instituto la condición indiscutible de ese derecho fundamental, que impone simultáneamente el deber correlativo del Estado y de los demás entes obligados de garantizar la entrega **oportuna, veraz, completa y fidedigna** de la información pública o en caso



contrario, fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución.

II. Bajo este contexto, en el presente procedimiento ha existido en principio disponibilidad por parte del ente obligado para la entrega de toda la información, habiéndose proporcionado la misma a excepción de la información de la concerniente a la subalterna con el nombre de “Nancy”, por haberse establecido que la misma es una estudiante que realizaba sus horas social en la oficina de la Defensoría de Derechos de los Estudiantes de la UES.

En atención a lo cual, la solicitud del apoderado del ente obligado es que se decrete el sobreseimiento por la entrega de información, y en contraste a ello, el apelante manifestó su inconformidad por alegar que la documentación recibida es incompleta, por lo cual es pertinente verificar el cumplimiento o no del DAIP del ciudadano **Josué Omar Fernández Solórzano**.

En tal sentido, la línea resolutive de este Instituto ha establecido que: “...*A la luz de los principios de la LAIP, la información pública debe brindarse al solicitante de manera pronta, oportuna, completa, fidedigna y veraz, mediante procedimientos simples y expeditos. Todo ello, en atención a la necesaria rendición de cuentas sobre el uso y administración de los bienes públicos que tienen a su cargo. Es decir, que la información debe ser entregada, de manera íntegra, completa o sin adolecer de alguna de sus partes ...*” (Resolución Definitiva emitida a las diez horas con treinta y ocho minutos del día once de diciembre de dos mil quince, dentro del expediente con referencia NUE 119-A-2015.)

Siendo el argumento principal del ente obligado que se ha cumplido con la entrega de la información se procede a realizar el análisis de la prueba admitida, conforme a las reglas de la sana crítica, en particular de la experiencia y la lógica.

En primer lugar, se procede a verificar el contenido de la información entregada al ciudadano apelante el día 13 de agosto de 2019, en audiencia de avenimiento realizada en el presente caso, constatando en la copia del CD entregado, trece documentos con la siguiente identificación:

1) RESPUESTA UAIP-MG 99.1-2019; 2) c_digital.zit -dentro de esta carpeta se encuentran 30 documentos más-; 3) INFORME NUE 143-A-20190001.pdf; 4) LEY DE SALARIOS UES 2019.pdf; 5) MGO99.6-2019001.pdf; 6) oficio 99.3 docx; 7) R inexistencia 036-2019-99.doc; 8) R orienta 6-2019.doc; 9) R 99-2019.doc; 10) Rem 32.pdf; 11) REMISIÓN INF MEMO UAIP- MGO 99.6-2019. PDF; 12) resp 32.pdf; 13) Respuesta UAIPMGO 99.6-2019_1.pdf.

Y de su contenido se puede advertir que existe un cúmulo de información desordenada y desorganizada entregada a la Unidad de Acceso a la Información de la UES, por parte de las distintas dependencias de la UES “central” y de las facultades interdisciplinarias. Asimismo, en los distintos documentos existen respuestas como: *“Esta información no es COMPETENCIA de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales entregarla, le sugerimos solicitarla a cada uno de los organismos universitarios”*. En el caso de la respuesta de la Facultad de Ciencias y Humanidades, se hizo una relación generalizada del salario que puede devengar el docente que integra la AGU o el CSU, sin hacer la determinación de hojas de vida, nombres, ni contactos telefónicos ni correos electrónicos. En tanto, la Facultad Interdisciplinaria Paracentral, remite el listado de los empleados que integran dichos organismos universitarios, pero no señala ni el salario recibido ni números de contactos, tampoco se proporcionan sus hojas de vida.

En tal sentido no se puede tener por garantizado el Derecho de Acceso a la Información si no se proporciona el contenido de la misma conforme a lo solicitado por el ciudadano apelante, incluso se puede verificar el no cumplimiento de la entrega de información relacionada con las secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Aunado a ello, en la documentación remitida por la UES no se cumplió lo ordenado en el art. 30 de la LAIP, en el sentido de tachar los elementos clasificados como información reservada o confidencial **con marcas que impidan** su lectura dejando una razón que exprese la supresión efectuada.

En este caso, ha quedado establecido que la oficial de información de la UES ordenó la entrega de la documentación con el dato bruto, es decir sin realizar ninguna labor estadística según lo requerido, sin que se establezca qué información se ha entregado específicamente siendo muy complejo y tedioso para un particular clasificar una información



mal relacionada, por lo cual no se ha entregado información completa, fidedigna y veraz, siendo obligación del ente obligado hacer la referida labor, al estar en mejor posición para realizar dicha clasificación, y así proporcionar la información según lo requerido. Asimismo, deberá proporcionarse de forma ordenada y completa lo correspondiente al directorio, currículo, y correos institucionales y la remuneración mensual del cargo presupuestario de las secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

Que siendo las medidas archivísticas un pilar fundamental del Derecho de Acceso a la Información Pública, no es comprensible que no se tenga organizada y actualizada la información correspondiente a los miembros integrantes de dos de los organismos del gobierno universitario, como lo son la AGU y el CSU. En este punto, el Art. 50 literales d, e y j de la LAIP, establece sobre las funciones de coordinación e instrucción que deben realizarse por parte de la oficial de información de la UES en relación a las unidades generadoras, a fin de garantizar de forma eficiente el DAIP.

Lo anterior ha sido retomados por líneas resolutivas de este Instituto, señalando que: *“Es pertinente mencionar que conforme a lo establecido en la letra “d” del Art. 69 de la LAIP, el Oficial de Información actúa como enlace entre el solicitante y el ente obligado, por lo que al recibir una solicitud de información debe realizar las gestiones internas necesarias para ubicarla y proporcionarla, si fuera procedente”*. (Resolución Definitiva de fecha 12 de noviembre de 2015, en el expediente con referencia NUE 8-A-2015).

III. Por otra parte es pertinente hacer las consideraciones correspondientes a la resolución de inexistencia con referencia UAIP/RI36/2019-99-2019, emitida por la oficial de información de la UES, 11 de junio de 2019, respecto a la información requerida de la “subalterna Nancy”.

Corresponde establecer que la declaratoria de inexistencia de la información, requiere el cumplimiento de ciertos elementos mínimos, como lo es establecer fehacientemente las acciones de búsqueda, es así que el art. 73 LAIP señala que en caso la información solicitada no se encuentre en la unidad administrativa, el oficial de información deberá analizar el caso y tomar las medidas correspondientes para su localización.

Por lo cual, para que una declaratoria de inexistencia adquiriera validez, debe estar amparada por todas las acciones realizadas para la ubicación de la información, correspondiéndole al ente obligado la carga de la prueba respecto a esa inexistencia.

En este punto, este instituto ha establecido que: “... *con el propósito de dar una mayor certeza de la inexistencia de la información requerida, es procedente que el oficial de información, no solo entregue la resolución de inexistencia, sino también las diligencias de localización de información y los resultados de las mismas...*”²; lo cual permitiría generar mayor transparencia en el actuar de la administración pública.

Consideramos que en el presente caso, al revisar el expediente administrativo, se puede advertir que esta resolución de inexistencia tampoco se entregó de forma organizada junto a la documentación que acredite su búsqueda; no obstante, relacionar tal resolución que existe documento emitido por la Defensoría de los Derechos Universitarios, que señalaba el motivo de la inexistencia de la información solicitada respecto a la subalterna denominada como “Nancy”, dejando claro que dicha persona no es una empleada de la UES y tampoco parte de algún organismo del gobierno universitario, por lo cual la misma no devenga un salario y en principio no tenía un contacto telefónico ni de correo electrónico institucional, siendo la función de la misma la realización de horas sociales.

En caso de contarse con los documentos institucionales que acrediten tal situación, la información requerida de la citada estudiante, efectivamente sería inexistente, debiéndose entregar al ciudadano apelante un legajo ordenado que acredite la búsqueda de cada uno de los elementos solicitados, a fin de comprobarse la imposibilidad de su cumplimiento.

3. Otras consideraciones

Respecto al escrito remitido por la parte apelante el día 11 de febrero de 2020, debe aclararse que como regla general, la tramitación de los procedimientos de apelación iniciados ante este Instituto, se hacen de forma independiente por cada caso presentado y sólo en caso que existan elementos para una acumulación se tramita en un solo expediente, no siendo el

² Resolución definitiva dentro del expediente NUE 21-FR-2016, con fecha 06 de julio de 2016.



caso de los expedientes NUE 18-A-2019 y NUE 143-A-2019, que incluso se encuentran en etapas procesales diferentes, por cuanto al no ser inteligible sus peticiones en dicho escrito no se dará trámite a las mismas.

Asimismo, respecto al posible proceso sancionatorio en contra de la oficial de información de la UES, se encuentra habilitado el derecho del ciudadano para presentar la denuncia correspondiente, según los requisitos establecidos en el Art. 150 en relación al 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Modificar** el contenido de la resolución impugnada, la cual fue emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador (UES)**, con referencia UAIP/RE099/2019, de fecha 12 de junio de 2019.

b) **Ordenar** a la UES, por medio de su titular, dentro del plazo de **10 días hábiles**, contados a partir del día siguiente de su notificación, entregue de forma completa, organizada y clasificada toda la información solicitada en el presente caso, consistente en: (i) “el directorio, currículo, y correos institucionales de los miembros que integran el Consejo Superior Universitario (CSU); la Asamblea General Universitaria (AGU); responsable de Auditoría Interna; (4) secretarías de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades; titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios; especificando la remuneración mensual del cargo presupuestado de todas las personas anteriormente mencionadas”; (ii) Una vez documentada adecuadamente la búsqueda de toda la información concerniente a la subalterna identificada como “Nancy”, se entregue junto a la resolución de inexistencia, el legajo de documentos correspondientes. Debiendo advertir a la UES que en caso de existir información confidencial deberá actuar conforme a lo establecido en el Art. 30 de la LAIP, es decir, deberá constar la razón que señale la supresión de información efectuada.

c) **Ordenar** a la UES que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo indicado anteriormente, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**


d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) **Declarar** no ha lugar lo requerido por el ciudadano apelante en escrito de fecha 11 de febrero de 2020, al no ser inteligible su requerimiento respecto a este caso, quedando habilitado su derecho para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio oportunamente, en caso que lo considere pertinente.


g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese. -


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



